



ANSA

## Aumento necesario, pero insuficiente

La noche del 3 de marzo, Nicolás Maduro anunciaba un nuevo aumento del salario mínimo, el mismo alcanza el medio petro o 126 bolívares; un aumento considerable, ya que el que se mantenía desde mayo de 2021 era de apenas 7 bolívares. Parece que puede haber una leve mejoría en las condiciones de vida de millones de venezolanos, pero todo dependerá de que el Gobierno esté dispuesto a realizar los correctivos económicos necesarios

Según los últimos estudios, una canasta alimentaria ronda los 150 dólares. El propio Maduro ha reconocido que un trabajador en el área privada está ganando un sueldo base cercano a ochenta dólares. Desde el Gobierno se decretó que el salario mínimo pasará de 1,63 a 28 dólares, un impacto que se verá reflejado, sobre todo, en la administración pública.

Sobre el nuevo aumento, llaman la atención dos cosas importantes: 1) El aumento fue anunciado el 3 de marzo, pero el decreto fue publicado en Gaceta el día 15, con efecto retroactivo para ese mes; sin embargo, el cobro de la subida salarial será para el 31 de marzo; 2) Nicolás Maduro había dicho que el salario estaría anclado en el petro, con el famoso "medio petro por salario", pero en la *Gaceta Oficial* no apareció tal anuncio, parece que todavía hasta ese punto no hay riesgo por parte del Gobierno.

Todavía está la deuda oficial de superación de la pobreza y la búsqueda de unas medidas que mejoren las condiciones de vida de los venezolanos. Ya los bonos que en-

tregan a través del Sistema Patria no cubren las necesidades de una familia, tanto que ni siquiera se pueden considerar *pañitos calientes*.

Sin lugar a dudas, el aumento salarial tendrá un impacto clave en millones de trabajadores, sobre todo aquellos que siguen en el sector público, donde las condiciones de vida y laborales han desmejorado significativamente. Muchos han desertado de sus puestos y han pasado al sector privado, donde los ingresos son mejores y se evidencia una leve mejoría en el entorno.

El Gobierno pudiera estar buscando tomar los correctivos necesarios para mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos, pero todo depende de sus decisiones y si está dispuesto a ceder en muchos aspectos, sobre todo dogmáticos, dejando de lado los principios del *socialismo* y buscando acuerdos con el sector empresarial.

Apenas estamos cruzando el primer trimestre de 2022 y habrá que esperar el impacto del nuevo salario en los trabajadores y hasta dónde les pueden alcanzar los bolívares, so-

bre todo, ante una economía que *extraoficialmente* ha adoptado el dólar como moneda de intercambio comercial, ante la desconfianza creciente frente al bolívar.

### EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DURANTE EL 2021

Lupa por la Vida es un proyecto de derechos humanos impulsado por el Centro Gumilla en alianza con Provea, que ha realizado una investigación exhaustiva sobre las violaciones a los derechos fundamentales, focalizándose en las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

El trabajo realizado tiene como base la recopilación de datos que sirvan de memoria y apoyo a las víctimas, así como a sus familiares para que puedan exigir justicia, verdad y reparación. También la iniciativa busca la construcción de políticas públicas que prevengan este tipo de situaciones y se restablezca el Estado de derecho.

Durante todo el 2021, Lupa por la Vida registró 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, reflejándose una reducción de casos en comparación con 2020, donde hubo 3 mil 034 denuncias de violencia policial y militar. Para los organizadores del proyecto, la reducción significativa de casos es el reflejo de la voluntad política de las autoridades para reducir las violaciones a los derechos humanos.

La investigación también destaca la reducción del papel de las Fuer-

zas de Acciones Especiales (FAES) en los diferentes operativos policiales desarrollados en el territorio nacional. Contrario a esto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se convirtió en el órgano policial más letal en el país, al tener registradas 347 presuntas ejecuciones.

También las policías estatales tuvieron su cuota de responsabilidad en la ejecución de este tipo de actos, al haber sospechas en 426 muertes. Los cuerpos de seguridad, tanto nacionales como regionales, deben responder ante estos hechos que representan una cuota en la desconfianza institucional que existe entre los ciudadanos.

Además, en el 2021, ocurrieron incidentes como la masacre de La Vega en Caracas y la de El Ripial en Apure. Sucesos que todavía no han sido esclarecidos y que se mantienen en un *silencio institucional*, sin una investigación que busque a los responsables, directos e indirectos, por las muertes ocurridas en tales hechos.

Uno de los datos más relevantes de Lupa por la Vida es el aumento de las víctimas femeninas en las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Durante el 2021, catorce mujeres fueron víctimas de los cuerpos de seguridad en comparación con el 2020, donde la cifra era de apenas cuatro. En todo el país, las más vulnerables a ser posibles víctimas de violaciones de derechos humanos son las mujeres que habitan los sectores populares.

Es necesario que instituciones como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, se aboquen a investigar todos los casos que involucren a los cuerpos de seguridad del Estado, para de esta forma garantizar mayor confianza en que se hará justicia por las víctimas y sus familiares.

Desde Lupa por la Vida seguirán trabajando, seguirán investigando, corroborando e informando sobre todas estas situaciones, para prevenir más violaciones de los derechos fundamentales y que las autoridades se enfoquen en garantizar mayores niveles de seguridad y confianza a la sociedad.

### ACERCAMIENTOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA

A muchos nos sorprendió la noticia: el fin de semana del 5 y 6 de marzo, Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con funcionarios de los Estados Unidos. En la reunión participaron, además del propio Maduro, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, así como Juan González, subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, y James Story, embajador de EE.UU. para Venezuela.

A pesar de cierto hermetismo, la información filtrada indica que la reunión busca abrir un nuevo canal de comunicación entre la Casa Blanca y Miraflores, con el objetivo de alcanzar mejoras significativas en la producción petrolera venezolana y que se exporte parte del crudo a los EE.UU., más cuando la situación entre Rusia y Ucrania ha disparado los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional.

Criticada o alabada, la reunión tuvo una respuesta por parte de las autoridades venezolanas: la liberación de dos estadounidenses que estaban detenidos en el país, un ejecutivo de Citgo y un turista. Dejando la puerta abierta a nuevos posibles acercamientos y más concesiones por parte de ambos gobiernos.

Habrà que esperar los próximos movimientos y cómo se mueve la geopolítica internacional, así como las reacciones del liderazgo político en el campo de la oposición.



OSWIN J. BARRIOS